

C.A. de Santiago

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Camila Suau Salas, interponiendo reclamo de ilegalidad en contra de la **decisión amparo Rol C4129-23** acordada por el voto de mayoría del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia de 29 de junio de 2023, que rechazó su amparo al derecho de acceso a la información pública respecto de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Expone que ingresó solicitud por el Portal de Transparencia del Estado el 1° de marzo de 2023, con el objeto de solicitar a la Servicio de Medio Ambiente el acceso a la siguiente información: “Solicito copia de todas las comunicaciones (entre ellas, correo electrónicos y cadenas de correos electrónicos) que se han enviado y/o recibido entre la Superintendencia del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Pesca ("SUBPESCA) o entre la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) comprendidas dentro del periodo desde el año 2021 a la fecha, relacionadas con los Centros de Engorda de Salmones de Cooke Aquaculture Chile S.A., consistentes en los CES Huillines 2, Huillines 3 y el CES Punta Garrao”.

Agrega que mediante Resolución Exenta N°560 de 28 de marzo de 2023 la SMA negó la solicitud únicamente por tratarse – supuestamente– de un requerimiento referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes y cuya atención requeriría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, numeral 1, letra c), de la LAIP; es decir



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XZHYKXXZJR

no fundó su rechazo en la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21, numeral 2, de la Ley de Transparencia, como improcedentemente la invocó el Consejo.

Alega que la reclamada vulneró el principio de congruencia, toda vez que la SMA no alegó como fundamento de su negativa a entregar la información solicitada la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la respectiva ley, lo que implica vulneración al principio procesal, pues no existe conformidad entre la Decisión Reclamada y las alegaciones que se hicieron valer ante dicho organismo. En el mismo orden de ideas niega la existencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°2, pues estima que los correos electrónicos solicitados son información de carácter pública y, por tanto, debe ser entregada por el órgano requerido; cita jurisprudencia en apoyo a su tesis.

En cuanto a la segunda causal, refiere que el alcance del artículo 21 N°1 letra c) está contenido en el Decreto N°13 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, relativo al Reglamento de la Ley N°20.285 y de su lectura es posible constatar que en la especie no se cumple con ninguno de los supuestos que se establecen para que la SMA justifique su rechazo a partir de la ya referida causal de secreto o reserva invocada. Indica que no se trata de un requerimiento de carácter genérico, ya que existe determinación precisa de las partes, origen, destino, periodo, objeto y del soporte; y tampoco es un requerimiento que tenga como consecuencia necesaria distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

Solicita se acoja el reclamo, dejando sin efecto la resolución reclamada y, en consecuencia, se acoja el amparo al derecho de



acceso a la información pública; todo ello con expresa condena en costas.

Segundo: Que informando el Consejo para la Transparencia solicita el rechazo de la acción intentada.

En primer término, se refiere a la solicitud efectuada por doña Camila Suau Salas, la cual obtuvo respuesta el 29 de marzo de 2023 donde la Superintendencia de Medio Ambiente deniega el acceso a las comunicaciones no publicadas en virtud de la causal de excepción prevista en el artículo 21° N°1 literal c) de la Ley de Transparencia.

Sostiene que la resolución recurrida no es ilegal, por cuanto se ajusta a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental y en los artículos 5°, 10° y 11° de la Ley de Transparencia, ya que si bien la información solicitada puede obrar en poder de la Administración Pública, ello significa que sólo, en principio, dicha información tiene carácter público, pero no se transforma en pública *per se* teniendo que entregarse a la solicitante por esa sola circunstancia, puesto que el derecho de acceso a la información no es de carácter absoluto, ya que tanto el artículo 8° inciso segundo, de la Constitución Política, como el artículo 21 de la Ley, prevén la posibilidad de acreditar la afectación que la publicidad pudiere ocasionar a algunos de los bienes jurídicos protegidos por dichas normas, permitiendo configurar una o más de las causales de reserva previstas en la Ley de Transparencia.

Luego señala que los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está



íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, por lo que para el Consejo para la Transparencia respecto de los correos electrónicos consultados, se configura la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación a lo previsto en artículo 19 numerales 4 y 5 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación en el artículo 33, letras j) y m), de la Ley de Transparencia, que disponen respectivamente, que este Consejo debe *“Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado”* y *“Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”*.

Agrega que otro argumento entregado por el Consejo para la Transparencia en orden a rechazar el amparo incoado dice relación con la causal del artículo 21 N°1 letra c), toda vez que se configuraba la distracción indebida de las funciones habituales de la Subsecretaría, produciéndose una afectación al debido funcionamiento del órgano, ya que se acreditó que para dar respuesta a la solicitud, se produciría una afectación al cumplimiento de las funciones del órgano requerido, pues estamos en presencia de un requerimiento cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales; ello conforme lo establecido en el artículo 7° inciso final del Reglamento de la Ley de Transparencia. Agrega que la decisión adoptada tiene su justificación en que la satisfacción del requerimiento implicaría la destinación de 3 funcionarios, el Jefe Regional y de dos fiscalizadores, esto es la



totalidad de los integrantes activos de la Oficina Regional de Aysén, por nueve semanas; por consiguiente la indicada oficina vería afectada su labor de realizar las actividades de fiscalización programadas, atender denuncias, realizar labores administrativas, dar respuesta a otras solicitudes información, atender público, elaborar informes de fiscalización, salir a terreno, asistir a los sujetos regulados, entre otras labores, tal y como se sostuvo en el considerando 19) de la decisión reclamada.

Finalmente, hace presente que no corresponde la condena en costas, ya que el Consejo para la Transparencia es el órgano que por ley debe ejercer una facultad de resolver amparos por denegación de acceso a la información, por la sola circunstancia de no quedar conforme con lo resuelto.

Tercero: Que se hizo parte la Superintendencia del Medio Ambiente e informando sobre el particular solicita igualmente su rechazo, argumentando para ello que mediante presentación de 1° de marzo del presente año la reclamante presentó solicitud de información al Servicio del Medio Ambiente (SMA), la cual fue denegada parcialmente mediante Resolución Exenta N°560 de 28 de marzo de 2023, indicándole a la solicitante que parte de la información solicitada se encontraba en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (“SNIFA”), señalando el enlace mediante el cual se podía acceder a la información.

Luego a modo de contexto, hace presente que la empresa Cooke Aquaculture Chile S.A. -representada judicialmente por don David Cademartori Gamboa, que patrocina a la reclamante de autos- tiene un largo historial de recursos de protección (5) en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, a propósito del procedimiento sancionatorio D-096- 20211, iniciado por la SMA mediante la Resolución Exenta N° 1/Rol D-096-2021, de 16 de



abril de 2021, que formuló cargos en contra de Cooke Aquaculture Chile S.A., en relación a diversos incumplimientos constatados en las unidades fiscalizables “CES Punta Garrao”, “CES Huillines 2”, y “CES Huillines 3”, todos emplazados en el Estero Cupquellan, comuna de Aysén.

De los nueve cargos formulados, dos corresponden a elusiones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de los CES Huillines 2 como el CES Huillines 3, que se encuentran emplazados dentro de los límites marítimos del Parque Nacional Laguna San Rafael.

Por lo anterior estima que este nuevo recurso por parte del abogado de la empresa, se enmarca en una estrategia de litigación en contra de la SMA y el ejercicio de sus facultades de fiscalización y sanción respecto a los instrumentos de gestión ambiental y, por lo tanto, a la protección del medio ambiente y la salud de las personas, lo que constituye un abuso desmedido de litigación por parte de la empresa, que ha requerido que la SMA deba utilizar tiempo excesivo de sus funciones a defender cada una de sus resoluciones.

En cuanto a la resolución impugnada, sostiene que en relación a la causal del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, no existe incongruencia procesal en la decisión de amparo, por cuanto la reclamante indica como primer argumento que la información es de carácter pública porque se refiere a correos electrónicos entre funcionarios públicos. Si bien afirma que al responder los descargos su parte destacó que esas comunicaciones, intercambiadas por funcionarios en ejercicio de sus funciones con otros organismos públicos son de carácter público, por lo cual al ser consideradas en algún procedimiento administrativo son públicas en el expediente correspondiente y



por ello se entregaron a la solicitante. Entiende que el Consejo podría pronunciarse por cuanto la discusión sí incluyó la publicidad de dichas comunicaciones y la autoridad debe velar por el debido cumplimiento de la Ley N° 19.628.

En cuanto al fondo de la causal del artículo 21 N°2 de la citada ley, cita jurisprudencia del tribunal constitucional y judicial, indicando que conforme a los criterios desarrollados en esas decisiones, para adquirir el estatus de “información pública”, el antecedente en cuestión deber vincularse con una decisión de autoridad; es decir, debe servir como fundamento de un acto administrativo. De esta forma, el fundamento de un acto consiste en aquellos antecedentes que la autoridad tiene en cuenta al momento de resolver (artículo 17 y 18, Ley N°19.880).

En este sentido, manifiesta que la SMA sí puso a disposición de la solicitante aquellos correos electrónicos entre la SMA y SERNAPESCA, que fundamentaron la decisión de adoptar medidas provisionales en contra de Cooke Aquaculture Chile S.A., precisamente en el Centro de Engorda de Salmónidos Huillines 3. Por otro lado, sostiene que si alguna autoridad ha decidido un asunto sin considerar o referirse a un antecedente específico, como son algunos de los correos electrónicos emanados de los funcionarios de la Superintendencia, difícilmente podrá pretenderse el carácter de públicos.

Agrega que algunas de las jefaturas de Fiscalía ya no son parte de la SMA, por lo que otros funcionarios tendrían que acceder a sus correos electrónicos para buscar si existen comunicaciones con SERNAPESCA y SUBPESCA.

Referente en cuanto a la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la citada ley que la solicitud efectuada es genérica y, además, causa distracción indebida en el funcionamiento del Servicio.



Indica que la reclamante omite indicar respecto a que instrumento de gestión ambiental se refiere, o qué materia en particular, de todas las que ve la SMA. Tampoco indica a cuál de todos los procedimientos que tramita la SMA se refiere o a que área, división o sección de la SMA abarca la solicitud. En el mismo orden de ideas agrega que dar cumplimiento a lo solicitado implica una distracción indebida, tal como se indicó en Resolución Exenta N°560/2023, como en el ORD. N° 1401, donde se explicó que el cumplimiento de la solicitud obligaría, al menos, a paralizar toda la oficina regional de Aysén de la SMA por 9 semanas aproximadamente. Afirma que la Superintendencia fundamentó esta causal en la baja dotación de personal para la realización de la actividad, la cantidad de correos electrónicos intercambiados con los servicios mencionados, la dificultad que representa la búsqueda de dicha información y el tiempo que tomaría la sistematización de lo requerido, lo que explica en su presentación.

Cuarto: No existe discusión acerca de la información de que se trata, y, por tanto, resolver el conflicto de autos importa determinar si la decisión impugnada se ajusta a la legalidad vigente en la materia y, por ende, si el Consejo para la Transparencia infringió el principio de congruencia procesal en relación con la causal del numeral 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 y además si se verifican en el caso de la especie, las causales de reserva acogidas.

Quinto: Es dable asentar que la norma constitucional del artículo 8° consagra el principio de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen en el ámbito de sus competencias. La Ley N° 20.285, creó la nueva institucionalidad con miras a promover y garantizar la



transparencia, por lo que ha de concluirse que la regla general es la publicidad y acceso a la información pública y la excepción la constituyen las causales del artículo 21 de la citada ley u otras que establezca una ley de quórum calificado, las que deben entenderse como un desarrollo o aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo de la norma constitucional.

De este principio constitucional, resulta claro que, para negar la publicidad y el acceso a la información pública, es imprescindible que se “afecte” alguno de los bienes jurídicos protegidos que la norma menciona.

La transparencia no es absoluta, pues se consagra como excepción el secreto o reserva en causales recogida en la ley y en este caso en las previstas en el artículo 21 de la citada normativa, que no hace más que ratificar el principio constitucional referido.

En efecto, el precepto citado dispone *“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:*

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.”

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.”

Sexto: Que de la Resolución impugnada se tienen por



establecidos los siguiente antecedentes

- a) Doña Camila Suau Salas solicitó con fecha 1 de marzo de 2023 a la Superintendencia del Medio Ambiente“(…) *copia de todas las comunicaciones (entre ellas, correo electrónicos y cadenas de correos electrónicos) que se han enviado y/o recibido entre la Superintendencia del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Pesca ("SUBPESCA) o entre la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) comprendidas dentro del periodo desde el año 2021 a la fecha, relacionadas con los Centros de Engorda de Salmones de Cook Aquaculture Chile S.A., consistentes en los CES Huillines 2, Huillines 3 y el CES Punta Garrao”.*
- b) Mediante Oficio Ord. N° 727 de 29 de marzo del mismo año la autoridad respondió el requerimiento de información pública comunicando que lo solicitado respecto de los procedimientos sancionatorios incoados, se encuentra permanentemente disponible en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental ("SNIFA"), de acceso público, proporcionado el correspondiente vínculo de acceso al expediente sancionatorio consultado. En lo demás denegó el acceso a las comunicaciones no publicadas, en virtud de la causal de excepción prevista en el artículo 21° N°1 literal c) de la Ley de Transparencia. Al efecto, por medio de Resolución Exenta N°560, de fecha 28 de marzo de 2023, argumentó que sería necesaria la revisión de las casillas de correos de todos los funcionarios involucrados en los procedimientos que se relacionan a los procedimientos



indicados, por cuanto las comunicaciones electrónicas no se encuentran sistematizadas, requiriéndose una búsqueda manual por el periodo de dos años, debiendo cada funcionario realizar una recopilación y revisión, labor que está fuera de sus obligaciones habituales, lo que implicaría retrasar o incluso detener las funciones propias del cargo servido y de la organización.

- c) La solicitante presentó acción de amparo por denegación de información pública, argumentado, en síntesis, que *“los correos electrónicos son generados en una casilla institucional, suponen el ejercicio de competencias públicas y constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional en cada uno de esos casos, todo lo cual supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública”*. Agregó la improcedencia de la causal invocada por la SMA señalando que *“(…) pesa sobre el órgano requerido la carga de probar que la solicitud de información de modo fehaciente suponga una afección al debido cumplimiento de las funciones que se realizan y, particularmente, cómo impediría o entorpecería el trabajo habitual de sus funcionarios. Como puede observarse de la respuesta de la SMA, nada de ello se indicó”*. Añadió que la información requerida no es genérica y que por su naturaleza no configura la causal de reserva alegada.
- d) En la decisión impugnada la reclamada estimó que los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto,



deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política y se enmarcan dentro de la expresión “comunicaciones y documentos privados” que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental. Se agregó también que el órgano requerido, para recabar la información solicitada deberá revisar las comunicaciones electrónicas solicitadas, lo que constituiría por sí sola una invasión inaceptable de la intimidad personal de los titulares de los correos electrónicos. Por ende, su publicidad es constitucionalmente admisible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley. Concluye que se configura, respecto de los correos electrónicos requeridos, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación a lo previsto en artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República, y que en cumplimiento de la atribución otorgada a la Corporación reclamada en el artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia, procede rechazar las alegaciones vertidas por la parte requirente en este aspecto.

- e) En cuanto a la causal de reserva alegada por el SMA, sostienen que ésta se configura igualmente por cuanto el conjunto de actividades que deben ser desplegadas para la proporción de los antecedentes consultados, reviste la entidad suficiente para concluir que se afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, ello



en atención al número de funcionarios, las actividades de fiscalización programadas, las denuncias presentadas y demás labores propias del servicio en la zona. Por ello estiman que lo solicitado y denegado, implicaría la utilización de un tiempo y recurso humano excesivo, considerándose la extensión de la documentación que debe ser revisada, ordenada, procesada y remitida. Por ende, la satisfacción del requerimiento de la especie implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, constituyendo una carga especialmente gravosa para el organismo, en circunstancias de que deben atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, y conjuntamente, observar los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones, por lo que estimó configurada también la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

Séptimo: Que el principio de congruencia procesal, denunciado como infringido por la reclamante, debe ser entendido como un presupuesto de garantía de un justo y racional procedimiento; se traduce en que el Tribunal -Consejo para la Transparencia en este caso- no excederá el objeto del proceso, debiendo siempre existir conformidad entre la sentencia y la pretensión o pretensiones del interesado.

En este aspecto, se tiene presente que la controversia ante el Consejo para la Transparencia quedó determinada por la solicitud -pretensión- y la oposición del requerido, incluyendo por cierto la causal de rechazo esgrimida por el órgano público. En el caso de la especie, la oposición se justifica únicamente en la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la citad Ley y no en la



numeral 2 del mismo precepto, sin que el Consejo para la Transparencia, como órgano de la administración del Estado -público y autónomo- esté dotado de facultades legales para emitir pronunciamiento sobre una causal de reserva no alegada por el requerido y, por tanto, que no formó parte del procedimiento administrativo, límite que le está vedado exceder por cuanto debe resolver el asunto sometido a su decisión conforme a la pretensión hecho valer y a la oposición deducida.

Entenderlo de otra forma importaría sostener que el órgano público goza de atribuciones para ampliar o modificar el contenido y fundamentos de las argumentaciones expuestas por el solicitante y el órgano requerido ante el Consejo llamado a resolver el conflicto, coherencia que igualmente debe mantenerse en la reclamación jurisdiccional. En efecto, el reclamado se alejó de la competencia entregada para resolver sobre la acción de amparo, pues se trata de un órgano de la administración del Estado que debe siempre someter su actuar a la ley y a lo previsto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental. Por otro lado, el artículo 24 de la Ley N° 20.285 señalada que el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo solicitando amparo a su derecho de acceso a la información y en su inciso segundo dispone que *“La reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañar los medios de prueba que los acrediten, en su caso”*. En el artículo siguiente se establece que *“La autoridad reclamada...podrá presentar descargos u observaciones al reclamo ...adjuntando los antecedentes y los medios de prueba de que dispusieren”*, es decir el Consejo interviene a requerimiento del interesado quien cuestiona la legalidad del proceder del órgano público -conforme a la respuesta entregada-



y existe claridad en que la causal del numeral 2 del artículo 21 no fue propuesta a la decisión del ente administrativo, resultando ajena a la discusión formalmente planteada.

A lo anterior se agrega que las atribuciones en que justifica su actuar el reclamado solo se refieren a las competencias generales entregadas al órgano público, como son precisamente las del artículo 33 en su letra j) y m) de la Ley N° 20.285, esgrimidas por el reclamado, esto es *“velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tenga carácter de secreto o reservado”* y *“velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”*, pero en manera alguna esas atribuciones justifican que en el ámbito del procedimiento administrativo de que se trata -amparo por denegación de acceso a la información pública-, el Consejo tenga por configurada una causa de reserva no alegada por el órgano requerido y, por ende, no debatida en esos términos en el proceso.

Finalmente, este tribunal no puede dejar de advertir que no se notificó a las personas que habrían recibido o enviado los supuestos correos electrónicos, cuando correspondía a ellas determinar si su divulgación afectaba o no sus derechos.

Octavo: Que asentado lo anterior, es dable señalar que la falta de congruencia -en el aspecto acreditado- no es suficiente para invalidar la decisión cuestionada por cuanto persiste la segunda causal de reserva que sí formó parte del procedimiento de amparo interpuesto y de la oposición del requerido, la que fue analizada y resuelta en la resolución que se revisa. Por tanto, a este tribunal corresponde revisar la legalidad del obrar del Consejo como órgano decidor en cuanto a la acusación del artículo 21



N° letra c) de la Ley N° 20.285.

Noveno: Que ese tribunal comparte lo razonado por el Consejo, por cuanto las tareas que supone la búsqueda de la información y su posterior sistematización, revisión y análisis para entregarla -si ello fuere procedente- demandan gestiones de tal entidad, que claramente entorpecerán la labor normal o el debido funcionamiento del organismo, ello considerando las circunstancias fácticas en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado por la Oficina Regional de Aysén de la Superintendencia del Medio Ambiente. En efecto, el reclamado consideró el número de funcionarios, el periodo requerido, la falta de precisión de las materias en que debería centrarse la búsqueda de las comunicaciones electrónicas, y las competencias del órgano fiscalizador. En el contexto descrito la oposición de la Superintendencia se ajusta a la legalidad en la medida que defiende el interés institucional y el debido cumplimiento de sus funciones.

Por consiguiente, no se advierte ilegalidad en la ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran la causal de reserva realizada por el Consejo, pues ella se justifica racionalmente no solo en el volumen de la información requerida, sino también en la relación entre funcionarios y las labores habituales que deben cumplir, tiempo estimado y costos. Lo anterior permite sostener fundamente -como se razona en la decisión reclamada- que en este caso se configura la distracción indebida invocada por el órgano público requerido, antecedente que conducen necesariamente a concluir que el Consejo obró conforme a derecho al rechazar al amparo deducido y tener por configurada la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XZHYKXXZJR

Décimo: Que de lo razonado es dable concluir que la normativa que rige la materia -en cuanto a la causal invocada por la Superintendencia del Medio ambiente- se ha aplicado en forma correcta, respetando las normas legales que rigen la materia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas constitucionales y legales citadas y en los artículos 21, 28, 29 y 30 de la Ley N° 20.285, **se rechaza el reclamo de ilegalidad** deducido por doña Camila Suau Salas, en contra de la **decisión de amparo Rol C 4129-23** acordada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en sesión ordinario N° 1368 con fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, que rechazó el amparo sobre derecho de acceso a la información pública respecto de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Redactó la ministra señora González Troncoso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Contencioso Administrativo-470-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XZHYKXXZJR

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Oscar Torres Z. Santiago, veintiseis de diciembre de dos mil veintitres.

En Santiago, a veintiseis de diciembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XZHYKXXZJR